



La guerrilla de los Fonseca en la amnistía 1953. - Fotógrafo desconocido, colección Guzmán



PENSAMIENTO
COLOMBIANO

CÁTEDRA BASTA YA

Orígenes, dinámicas y
crecimiento del
conflicto armado

MÓDULO 2



Centro Nacional
de Memoria Histórica



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Organización
Internacional
para las
Migraciones



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Sesiones de la cátedra las que corresponde:

- 4: Los actores armados, orígenes, características y transformaciones.
5. Los problemas agrarios y su relación con el conflicto armado.
6. Narcotráfico y presencia desigual del Estado en las regiones.
7. La exclusión política, la instrumentalización y el miedo a la democracia

Objetivo:

A lo largo de éste módulo se busca analizar dos temas íntimamente relacionados: I) los motivos, objetivos, lógicas y transformaciones de los actores armados, y II) el contexto en que la guerra se ha prolongado y degradado.

Inicialmente se presenta un análisis del origen y evolución de los actores armados ilegales en Colombia, luego se abordan 5 problemas clave para entender el desarrollo del conflicto: I) el problema agrario continuamente aplazado, II) las limitaciones y las distorsiones de la democracia, III) la presencia desigual del Estado en las regiones, IV) el narcotráfico, y V) las influencias y presiones de las políticas internacionales.

Palabras clave:

Actores armados: guerrillas, Estado y paramilitares; degradación de la guerra; prolongación de la guerra; problema agrario; narcotráfico; limitaciones y distorsiones de la democracia, manera desigual como se ha construido el Estado en las regiones; influencias y presiones de las políticas internacionales.



Ideas fuerza

Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado



Una guerra larga, cruel y compleja como la colombiana merece ser comprendida en toda su dimensión. Indignarse frente a los desastres de la guerra es muy importante pero insuficiente. Sólo si se comprende el entramado de motivos, objetivos, lógicas y sobre todo las transformaciones de los actores y el contexto, es posible encontrar el camino para ponerle fin y decir: ¡Basta ya!

Foto: Quince campesinos liberales hombres y mujeres fueron exhibidos en línea como trofeos de guerra y retratados por el conocido fotógrafo Luis Gaitán, como testimonio de las crueldades cometidas por la violencia oficial. - Fotografía: Archivo Revista Semana© Colombia.

Origen y dinámicas de las Guerrillas

Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60 como respuesta a los problemas agrarios no resueltos, producto de una larga tradición que ya tenía el país de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, pero también como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por frenar la violencia bipartidista y porque en el contexto de la guerra fría había un auge de movimientos insurgentes y de liberación nacional inspirados en el triunfo de la revolución cubana.

Se puede decir que las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80 cuando se proponen acumular fuerzas combinando todas las



Foto: La guerrilla de los Fonseca en la amnistía 1953. - Fotógrafo desconocido, colección Guzmán.

formas de lucha con miras a una insurrección y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado, y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales, por la vía exclusivamente violenta.

Las FARC nacen oficialmente en 1966, dos años después que el Ejército bombardeara las llamadas repúblicas independientes como Marquetalia, donde campesinos que habían sido liberales durante La Violencia se mantenían en armas, ahora bajo la orientación del Partido Comunista Colombiano. Esa resistencia coincide con la decisión de los comunistas de establecer un grupo armado como reserva en caso de que la democracia se cerrara definitivamente como estaba



Foto: El Cristo campesino, fotografía emblemática de la violencia liberal - conservadora en el periodo comprendido entre 1946 a 1953. - Fotógrafo desconocido, colección Guzmán.

ocurriendo con las dictaduras militares en el resto de América Latina y también como un influjo de la revolución Cubana que acababa de triunfar. Al momento de su fundación, las FARC cuenta con 300 combatientes y seis frentes, casi todos en el sur del país.

Bajo el influjo de corrientes internacionales, a mediados de los 60 también nace el ELN, una guerrilla fundada por estudiantes y profesionales que acoge las teorías del foco armado del Che Guevara que se asienta en zonas rurales del oriente del país y Antioquia, pero que logra algún arraigo entre estudiantes y sobre todo en la clase obrera petrolera.

En 1967 se fundaría el EPL, brazo armado de la disidencia del Partido Comunista conocida como PCC-ML, inscrito en el conflicto chino-soviético dentro del campo comunista internacional, de orientación maoísta que cree en la guerra popular prolongada y en que la revolución irá del campo a la ciudad. Sus asentamientos más fuertes se dieron en las sabanas ganaderas de los departamentos de Córdoba y Sucre, y el enclave agroindustrial del banano en Urabá.

Hasta finales del Frente Nacional la existencia de estas guerrillas no representó una guerra propiamente dicha. La violencia se mantuvo en niveles bajos en parte porque estos grupos armados estaban en regiones muy periféricas, pero también porque el Frente Nacional había sido una promesa reformista de modernización y equidad, a la vez que una realidad que reprimía la protesta y la movilización social. No fue sino hasta el final del Frente Nacional que irrumpe una guerrilla que cambiaría las acciones de la insurgencia. El M19 nace a mediados de los 70 como un grupo armado urbano cuyas acciones militares estaban en función de lograr un gran impacto político sobre el establecimiento y la simpatía de las masas populares.

A las acciones espectaculares realizadas por el M19, como el robo de la Espada de Bolívar o de mil fusiles de una guarnición militar, se sumaron el profundo desencanto de la población con los partidos tradicionales y con las reformas inconclusas del Frente Nacional. Este desencanto se salió de cauce en una virulenta protesta: el paro cívico de 1977. En un clima tan crispado, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua le dio aún más brío a los movimientos rebeldes.

Al iniciar la década de los 80, los insurgentes se plantean una estrategia de toma del

poder combinando la guerra de guerrillas con la acción política y la influencia en los movimientos sociales que cada vez se radicalizan más. Las guerrillas buscan expandirse e incidir en las regiones más conflictivas. Las FARC, cuya dirigencia en ese momento es profundamente agraria, crecen sobre todo en las regiones de colonización y ganaderas. El ELN en zonas de auge minero y petrolero, y el EPL en enclaves de la agroindustria, en regiones ganaderas y en territorios donde otrora se intentó hacer la reforma agraria. Y el M19 en las ciudades y en el sur del país.

Un sector de las élites teme que las guerrillas logren sus propósitos revolucionarios y antes de que sea tarde les lanzan una oferta de negociación política e incorporación a la democracia durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El proceso es aprovechado por las guerrillas para crecer. Al finalizar el gobierno de Betancur, sus frentes se han multiplicado y han logrado tener en el escenario público movimientos políticos con relativo éxito como la Unión Patriótica, que les disputan el poder en las elecciones locales y regionales a los políticos tradicionales.

El proceso de paz conto con muchos enemigos. Un sector fuerte de los militares se opone a él y abiertamente lo sabotean. Los partidos y las élites económicas se resisten a que la paz impulse reformas estructurales para el país. Finalmente, élites locales, asociados con miembros de la Fuerza Pública y el narcotráfico, crean los primeros grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, que desatan una guerra sucia contra la izquierda legal y contra las bases sociales de los grupos insurgentes.

A mediados de esa década el proceso de paz languidece y el Estado está acorralado por la guerra que le ha declarado el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar. Las guerrillas radicalizan sus acciones militares contra la fuerza pública, contra la infraestructura del país. Exacerban la lucha social y política y se proponen dar un salto hacia la insurrección con el paro cívico del 27 de octubre de 1988, durante una huelga general convocada por todas las centrales obreras y grupos campesinos del país.

Pero la huelga fracasa y diversos factores hacen que el propósito insurreccional



Foto: Época de la Violencia - Fotografía: Archivo particular

de las guerrillas se vea cada vez más lejano. Uno de ellos, la crisis global del modelo socialista y la profunda crisis de violencia terrorista que vive Colombia.

Este momento crucial es interpretado por el movimiento guerrillero de manera disímil. El M19, el EPL, y otros grupos menores, asumen que la lucha armada está agotada y aceptan la oferta que les hace el Estado de ingresar a la vida legal, en una coyuntura en la que se está gestando un nuevo pacto social y político, a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo las FARC y el ELN creen que las vías legales están cerradas, entre otras razones, por la expansión del fenómeno paramilitar y el exterminio de la Unión Patriótica, sin desconocer su profunda convicción acerca de la viabilidad de la toma del poder a través de su plan estratégico delineado en la VII conferencia de esa organización guerrillera en 1982. Declinan participar en la constituyente y después de un intento fallido de diálogos

con el gobierno de César Gaviria en Venezuela y México, se van a la guerra con todas sus fuerzas, durante los siguientes 20 años.

Durante los años 90, la apuesta de la insurgencia, especialmente de las FARC, es tomarse el poder por la vía de las armas, con una estrategia de asedio militar a las elites, tendiendo un cerco a Bogotá y las grandes ciudades, y buscando el colapso del Estado. Le asestan enormes golpes militares al Ejército, realizan secuestros masivos en carreteras, iglesias y aviones. Sabotean la economía y la infraestructura.

El Estado se siente doblegado por la guerrilla e inicia un nuevo proceso de paz, conocido como El Caguán porque el gobierno desmilitarizó 42.000 kilómetros en esta región del suroriente del país, para facilitar los diálogos. Este intento fracasó dos años después, cuando quedó claro que tanto el gobierno como las FARC se preparaban para profundizar la guerra. Al terminar el proceso, esta guerrilla contaba con 16.000 combatientes y había multiplicado sus frentes, que ahora eran más de 60.

En ese lapso las fuerzas militares habían dado un gran salto, gracias a los ingentes recursos que recibieron del Plan Colombia. Helicópteros, inteligencia técnica, aviones de combate, una duplicación del pie de fuerza, fueron la base para rearmar su estrategia y diseñar un plan de guerra para derrotar a las guerrillas. Todo ello en medio de un sólido consenso entre las elites a favor de la salida militar al conflicto y en detrimento de las soluciones negociadas. Consenso que encarnaba Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática entre 2002 y 2010.

Durante toda la primera década de este siglo, las guerrillas perdieron terreno, legitimidad y capacidad ofensiva. Luego de duros golpes recibidos, incluyendo la muerte de cinco de los siete miembros históricos del secretariado de las FARC, éstas retoman el rumbo político que habían abandonado años atrás y buscan una solución negociada al conflicto. El ELN intenta hacer lo mismo. Esta vez con una correlación de fuerzas diametralmente opuesta a la que existía durante los diálogos de El Caguán.

Este cambio de situación generó una división en las elites políticas, pues mientras un sector importante persiste la idea que por vía militar se puede acabar con la existencia de las guerrillas, otro sector de ellas admite que la vía de la negociación es menos costosa para el país.

Las dinámicas del Estado frente al conflicto armado

En estos años de guerra, el Estado ha oscilado entre sus intentos reformistas y pacifistas para tratar el conflicto, y las salidas represivas y militares. Lo que inicialmente hacía parte de una estrategia única para enfrentar el comunismo en los años 60 y 70, se convirtió luego en una disyuntiva desde los años 80. Esta paradoja tiene su origen en los arreglos institucionales del Frente Nacional que se hicieron para garantizar la pacificación de la violencia bipartidista.

Uno de estos arreglos consistió en otorgarles una relativa autonomía a los militares para el manejo del orden público en un contexto de guerra fría en el que imperaba la doctrina del enemigo



Foto: Reporte de prensa de El Espectador, 15 de junio de 1965.

interno. Entendiendo por orden público desde la protesta social hasta la acción insurgente como expresiones del comunismo internacional que había que combatir. Es así como en el ocaso del Frente Nacional, cuando el desencanto se manifiesta en reclamos muy radicales, los militares tratan con mano de hierro a los opositores y críticos del régimen, mientras que los gobiernos civiles empiezan a ser más proclives al diálogo.

Un hito histórico de esta contradicción es el paro cívico de 1977 que se dio durante un gobierno liberal como el de Alfonso López Michelsen, reconocido disidente en los primeros años del Frente Nacional, que sin embargo fue reprimido sin titubeos. Este paro daría pie para que un sector influyente de las fuerzas armadas propusiera una serie de medidas excepcionales de orden público que el gobierno siguiente, el del también liberal Julio César Turbay, adoptaría con el nombre de Estatuto de Seguridad, que se convirtió en un fuerte incentivo para las primeras violaciones de los derechos humanos por parte de miembros del Estado.

Esa incipiente hoguera se avivaría con la ruptura del monopolio de la fuerza por parte del gobierno, cuando se aprobó la Ley 48 de 1968 que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares en los años 80.

Es así como los primeros esfuerzos de contener la expansión guerrillera por la vía de la negociación y las reformas, en cabeza de Belisario Betancur chocaron con el sabotaje de las elites políticas y económicas regionales que no admitían un escenario de competencia política con la izquierda. Y por supuesto de los militares que se opusieron durante la década de los 80 a cualquier arreglo político con los grupos insurgentes. Al final Betancur se quedó solo y sectores radicales de las élites y los militares terminaron alimentando la maquinaria de la guerra sucia contra líderes sociales y de izquierda, disidentes políticos, y en ocasiones simples librepensadores como Héctor Abad Gómez.

La Constitución de 1991 se convirtió en un nuevo intento para abrir la democracia, modernizar al país y crear un consenso alrededor de la paz. Pero tanto la idea

de oxigenar el sistema político con la descentralización política y administrativa como impulsar el crecimiento con la apertura económica implicaron dejar al país rural en manos del mercado y debilitar la presencia estatal en las zonas de conflicto armado, lo que puso el territorio a merced de los grupos armados.

Las fuerzas militares, que habían sido sometidas al control civil en la nueva Constitución, estaban bajo la mirada de los organismos de derechos humanos que ahora empezaban a tener un lugar importante en la agenda política global.



Foto: El padre Camilo Torres en una manifestación contra el gobierno del Frente Nacional.
Fotografía: El Espectador 1965



Foto: En casa verde, ubicada en la Uribe Meta, se reunieron los comandantes de las distintas guerrillas para darle inicio a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987.
Fotografía: archivo periódico Voz.

Hacia mediados de la década de los 90 la violencia persistía en las zonas rurales y las guerrillas estaban desarrollando una ofensiva sin precedentes. El Estado, en lugar de apostar por el fortalecimiento de las fuerzas militares en esos territorios, optó por un remedio cuyos efectos nocivos ya conocía de vieja data: privatizar la seguridad. Esta vez con la figura de las Cooperativas de Seguridad Convivir, que se convirtieron en el gran catalizador de la expansión del paramilitarismo por toda la geografía, en un estrecho maridaje con miembros de la Fuerza Pública en las regiones e incluso con la anuencia de gobernadores y alcaldes.

Cuando la guerra alcanzó su clímax de crueldad y victimización, Andrés Pastrana (1998-2002) le propone al país una salida política que no tiene un respaldo

definitivo de las élites. Es así como el gobierno se juega algunas de sus cartas en la negociación con las guerrillas, pero se guarda los ases para fortalecer como nunca antes a las fuerzas militares, lo que fue posible con el Plan Colombia que recibió todo el apoyo de Estados Unidos. Esta paradoja de pedir la paz mientras se intensifica la guerra fue posible porque las partes acordaron dialogar en medio del conflicto, sin que mediara ningún cese del fuego.

Cuando el proceso de paz fracasa, ya están sentadas las bases que harían posible por primera vez un consenso fuerte y prolongado de las elites y la opinión pública alrededor de la salida militar. La guerra, la salida militar y represiva había roto la eterna ambigüedad del Estado y una parte de la sociedad frente a la guerrilla.

La política de seguridad democrática que implementó Álvaro Uribe durante sus ocho años de gobierno significó una relativa recuperación del control territorial y un importante retorno al monopolio de la fuerza al ser desmontados los grupos paramilitares, aunque fuera parcialmente. Tanto la gran campaña de exterminio de los paramilitares a finales de los 90 como la ofensiva de la fuerza pública en la última década, que afectó por primera vez a la cúpula de las FARC, debilitaron estratégicamente a las guerrillas y su proyecto insurgente.

Pero el Estado no logró consolidar su éxito militar. Primero porque actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas, como las ejecuciones extrajudiciales, presentadas como muertes en combate, golpearon fuertemente su legitimidad. Y segundo, porque la presencia social del Estado fue precaria y no resolvió las inequidades estructurales del campo que se han profundizado por el saqueo y el despojo que ha producido el conflicto. Además, por la debilidad de las instituciones locales y nacionales, capturadas por los paramilitares a través de sus estructuras políticas.

Es así como durante el ocaso del gobierno de Uribe, las guerrillas estaban remontando en su iniciativa militar y sobre todo, política, y de nuevo un sector de las élites, representado en Juan Manuel Santos, busca una salida política del conflicto con un proceso de diálogo con las FARC que se lleva a cabo en La Habana.

Los orígenes y dinámicas de los paramilitares

Los paramilitares no son un movimiento homogéneo. Su nacimiento y desarrollo ha sido difuso y fragmentario, con momentos de alta coordinación pero lealtades muy frágiles, que han derivado en crisis internas, descomposición, y finalmente desembocaron en una negociación con elementos fallidos, y un rearme parcial.

A finales de los años 70, cuando las guerrillas empiezan a expandirse, se crean grupos de autodefensas locales, legales y apoyadas por las fuerzas militares, que buscaban defender a grandes y medianos propietarios de las extorsiones y secuestros. Sin embargo, estos primeros grupos de autodefensa nacen con el enemigo adentro: el narcotráfico.



Foto: Valla instalada a la entrada del Municipio de Puerto Boyacá.
Fotografía: Revista Semana 2002

Efectivamente, muy pronto un núcleo central de estas autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscan contrarrestar la expansión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas en el gobierno de Belisario Betancur. El epicentro paramilitar del Magdalena Medio encuentra su declive cuando el presidente Virgilio Barco logra que se derogue toda la legislación que desde 1968 le ha dado piso legal a las autodefensas y también por las disputas internas que se desencadenaron por la penetración del narcotráfico.

No obstante, en todo el país quedan grupos ilegales que tienen una doble faz. Por un lado, mantienen una campaña de exterminio a las bases de la izquierda y a los líderes sociales que compiten contra las elites locales en un contexto de descentralización política y administrativa. Por otro lado están al servicio de narcotraficantes que al fin y al cabo son sus grandes financiadores. El nuevo modelo paramilitar que emerge en los años 90 tiene su máxima expresión en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá bajo el mando de Carlos Castaño.

Ahora bien, el peso relativo del narcotráfico en el paramilitarismo no puede en ningún caso agotar el fenómeno en su criminalización, ya que suprimirle su naturaleza contrainsurgente invisibiliza la participación de otros sectores de la sociedad en su expansión y consolidación.

Hasta principios de los 90, las FARC y el EPL comparten su influencia en los sindicatos del banano, y en general en la región que tenía una de las agroindustrias más importantes del país. Pero cuando el EPL deja las armas, la competencia con las FARC se profundiza y se vuelve asimétrica: los unos siguen en armas, los otros no. En medio de esta contradicción están los paramilitares del Clan Castaño, quienes emprenden una campaña sangrienta contra las FARC y toda su base social, en alianza con sectores del desmovilizado EPL que al tiempo, veía caer a centenares de sus militantes a manos de las FARC. El saldo final de cinco años de exterminio recíproco es que los paramilitares logran derrotar a las FARC en Urabá, y Carlos Castaño, el gran vencedor, se dispone a exportar su modelo contrainsurgente al resto del país.



Foto: Sepelio de Jaime Pardo Leal en la plaza de Bolívar.
Fotografía: El Espectador 1987

Élites económicas y políticas de las regiones más azotadas por la guerrilla quieren que se replique el modelo. Por supuesto también los nuevos capos del narcotráfico que en las regiones tienen fuertes disputas con los grupos insurgentes por el dominio de las rutas y los cultivos de coca y por el control de las rentas y el poder local. Pero esta ofensiva paramilitar no será contra la guerrilla propiamente, sino contra la población civil. El propósito es instaurar un proyecto político y militar propio que frene la modernización y democratización que prometía la Constitución del 91. Un proyecto para refundar la patria, como ellos mismos lo llamaron.

Pero Castaño nunca logra unificar a los grupos paramilitares que hay regados por todo el país al mando de narcotraficantes. Con ellos logra alianzas frágiles, que en todo caso todo el tiempo están interferidas por las rencillas propias de las mafias.

Luego de que fracasa El Caguán, y que el Estado fortalece su aparato militar para una lucha sin tregua contra la guerrilla, los paramilitares buscan una salida política, pues sienten que su proyecto político está consolidado. Quieren negociar su desarme y la legalización de los bienes y el poder que han acumulado durante la guerra. Tampoco ignoran los paramilitares el nuevo contexto internacional signado por la lucha contra el terrorismo ni la creciente internacionalización de la justicia.

Pero la contradicción con el narcotráfico que llevan en su seno estalla durante la negociación que han abierto con el gobierno de Álvaro Uribe. Las corrientes más contrainsurgentes fueron derrotadas, mientras las que estaban más inclinadas a actividades del narcotráfico y otras rentas ilegales terminaron rearmándose, manteniendo también el asedio político en muchas regiones.



Foto: Sala de Redacción del periódico El Espectador, tras la bomba puesta por el cartel de Medellín.
- El Espectador, 1986

Las constantes y las rupturas

(los 5 factores explicativos)

El Grupo de Memoria Histórica encontró en su informe que a lo largo de seis décadas de conflicto hay problemas que han tenido continuidades y rupturas en determinadas coyunturas. Se trata del problema agrario continuamente aplazado, de las limitaciones y las distorsiones de la democracia, de la manera como se ha construido el Estado, del narcotráfico y de las influencias y presiones de las políticas internacionales.

1. El problema agrario

La tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No sólo porque nunca se ha llevado a cabo una verdadera reforma agraria, y la democratización de la propiedad de la tierra sigue siendo una promesa incumplida para gran parte de los campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y el uso de los recursos rurales. Hay un déficit de Estado en el campo y una fuerte presencia y arraigo de los grupos armados.

El problema de la tierra se ha ido acumulando por años. La guerra civil de mitad de siglo XX se dio en medio de las frustraciones que dejó la reforma inconclusa de 1936, propuesta por Alfonso López Pumarejo con su revolución en marcha. La violencia bipartidista no hizo más que agudizar el panorama del campo. Se calcula que dos millones de hectáreas fueron despojadas durante ese periodo.

A finales de los años 60, Carlos Lleras Restrepo se propone sacar adelante una verdadera reforma agraria que acabe con el gran latifundio improductivo en manos de terratenientes. Quería modernizar el campo y se apoya en los campesinos

a través de la promoción de una fuerte organización campesina (ANUC). Pero en 1972 la reforma se frena cuando en Chicoral, Tolima, los gremios del sector agropecuario y un grupo de congresistas pactan una reforma que le quita los dientes a la ley que permite las expropiaciones.

En su incapacidad para romper el latifundio, el Estado ha recurrido sobre todo a ampliar la frontera agraria, impulsando tácita o explícitamente la colonización en zonas baldías, a la par con la adjudicación de baldíos como política pública.

Durante la década de los ochenta la expansión de la frontera agrícola se hizo cada vez mayor. Miles de colonos llegaron a zonas selváticas y olvidadas empujados por la crisis del



Foto: Imágenes del Paro Cocalero en Puerto Asís, Putumayo durante 1996.
Fotografía: Manuel Saldarriaga, El Colombiano

café, y por el auge de las agroindustrias, de la minería, el petróleo, y de la coca. Tal fue el crecimiento de este cultivo de uso ilícito que a principios de los años 80 había 4.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y a principios de este siglo ya eran 160.000 sobre todo en el sur del país.

En estas regiones de reciente colonización el Estado ha sido muy débil, y los grupos armados, guerrillas al principio, y después también paramilitares, coparon esos espacios.

Esta situación se agravó con la apertura económica de principios de los 90 que lanzó a un sector en crisis, a competir en el mercado internacional sin apoyo suficiente del Estado. Agroindustrias medianas y campesinos pobres terminaron quebrados. Los primeros se volcaron a la ganadería y los segundos a la coca.

La debilidad institucional en zonas de conflicto favoreció la apropiación masiva de tierras por parte de narcotraficantes, así como el desplazamiento forzado de la población y el consecuente despojo de sus fincas, que hoy suman ocho millones de hectáreas. Esta contra-reforma agraria ha afectado de manera muy particular a las comunidades indígenas y afro-descendientes beneficiadas con titulaciones colectivas que han sido cruciales para su subsistencia como etnias.

El resultado final es que hoy Colombia tiene una distorsión de la tenencia y uso de la tierra. Usa 39 millones de hectáreas en ganadería, cuando lo recomendable sería no más de 24; y en contraste, tiene apenas 4 millones dedicadas a la producción agropecuaria, cuando podrían llegar a ser 21. Además posee uno de los índices de desigualdad más grandes del mundo en el país rural. A este modelo, se suma la reciente expansión de monocultivos industriales y el auge minero.

En ese contexto, el presidente Juan Manuel Santos está implementando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que busca devolverle los predios a quienes los perdieron durante el conflicto, legalizar los títulos de propiedad en un país donde la informalidad es muy alta y en todo caso entregarles tierra a miles de desplazados que nunca la tuvieron.

2. El miedo a la democracia

El miedo a la democracia ha sido una constante en Colombia y se convirtió en un incentivo para la prolongación del conflicto. En tiempos de guerra o de paz, el país ha acudido a figuras restrictivas de la participación, la protesta o la disidencia, especialmente con medidas o largos períodos de excepcionalidad. Desde 1940 hasta que se promulgó la constitución del 91, el país estuvo casi siempre bajo Estados de Sitio, que significaban en la práctica un paréntesis a los derechos y libertades.

Ex-candidatos presidenciales asesinados en medio del conflicto armado



Jaime Pardo Leal 1941 - 1987
Fotografía: Archivo Revista Semana



Luis Carlos Galán 1943 -1989
Fotografía: Archivo Revista Semana



Bernardo Jaramillo 1956-1990
Fotografía: Lope Medina, Semana.



Carlos Pizarro León Gómez 1951-1990
Fotografía: Fundación Carlos Pizarro L.- Archivo María José Pizarro.

El Frente Nacional a pesar de que significó una relativa pacificación del país demostró un profundo miedo a la democracia. Al ser un pacto de rotación de la presidencia, la competencia política se vio reducida para quienes estaban por fuera de los partidos tradicionales y en ocasiones horadó la legitimidad de las propias elecciones, como en 1970 cuando se denunció un fraude a favor del candidato conservador del Frente Nacional Misael Pastrana y en contra del candidato de la Anapo, Gustavo Rojas Pinilla. Ese supuesto fraude fue esgrimido por los fundadores del M19 como el motivo de su alzamiento en armas.

Este temor a la competencia política, tanto por parte de las elites, como por parte de los grupos armados de derecha y de izquierda, se ha expresado de manera brutal con el asesinato de candidatos a la presidencia y a todas las corporaciones públicas.

Su máxima expresión ha sido el exterminio que han sufrido los movimientos de izquierda, en especial, la Unión Patriótica, así como el exterminio del clan liberal de los Turbay en Caquetá, por parte de las FARC, o de los miembros de Esperanza, Paz y Libertad también por parte de esta guerrilla en Urabá.

La estigmatización y criminalización de la oposición política le ha hecho una gran mella a la democracia. Durante el Frente Nacional y hasta finales de los años 80 la adscripción anticomunista de las fuerzas militares les imprimió un sesgo político que en medio de la excepcionalidad legal que imperaba, hizo que muchas personas de la izquierda, aun los que no estaban vinculados a grupos insurgentes, fueran allanados, detenidos, vigilados, torturados, amenazados, exiliados y en ocasiones desaparecidos y asesinados.

Si bien la nueva Constitución estableció garantías para que eso no ocurriera, la continuación del conflicto armado no sólo impidió la vigencia de esas garantías sino que agudizó la estigmatización.

La Constitución del 91, que encarna una promesa de democracia profunda, inspiró temor tanto en guerrilleros como en paramilitares y por eso apostaron por su



Noticia de prensa en El Espectador de el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Fotografía: El Espectador, 1995

fracaso. Las guerrillas manifestaron ese temor con el arrasamiento del Estado en las regiones, con el secuestro de alcaldes, la destrucción de los bienes y obras públicas, las masacres a concejales y a los funcionarios del gobierno. Los paramilitares por su parte, capturaron las instituciones del Estado a punta de fusil. Manipularon las elecciones en muchas regiones para apoderarse de todo el sistema político y eliminar a cualquier contradictor. También es evidente que actuaron con la complicidad por acción u omisión de importantes sectores de la Fuerza Pública, la justicia y las instituciones, incluso a nivel nacional. En algunas regiones estas alianzas han sido de largo aliento y se niegan a desaparecer.

Tanto guerrillas como paramilitares han instrumentalizado las instituciones y mecanismos de la democracia. Las elecciones, por un lado, pero también los espacios de participación social, la protesta y los movimientos sociales como juntas comunales y sindicatos. Unos y otros han castigado con violencia los gestos de autonomía que han hecho las comunidades

por el narcotráfico, se hayan convertido en una fuerza política en la sombra de congresistas, alcaldes y gobernadores.

Posiblemente el mayor impacto que ha tenido el narcotráfico en la guerra colombiana ha sido la manera como se han cruzado la lucha contrainsurgente y la lucha contra las drogas. Esto fue particularmente llamativo con el Plan Colombia, que fue aprobado como un plan para detener el narcotráfico y terminó siendo el punto de quiebre en la guerra contrainsurgente, ya que el 60% de sus recursos se fueron al fortalecimiento de las fuerzas militares.

Hay que decir que mientras duró este Plan, el discurso del Estado no establecía diferencias entre guerrilla y narcotráfico y se trató a los grupos insurgentes como carteles de la droga. Este desconocimiento del carácter político de las guerrillas y su designación como meros criminales tuvo consecuencias como la extradición, a pesar de que la Constitución prohíbe que los delitos políticos sean juzgados por otras naciones.

Su incidencia en el problema agrario también es muy importante. Desde hace tres décadas los narcotraficantes se han hecho a las mejores tierras del país, a veces comprándolas por encima del precio para lavar activos y distorsionando el mercado; y en otras, haciéndose a ellas a la fuerza por razones de control territorial y para impulsar los cultivos ilícitos.

No hay que subestimar el cambio cultural que ha dejado el narcotráfico. El imaginario del dinero fácil y el ascenso social inmediato no solo ha funcionado como un incentivo para la violencia entre jóvenes y sociedades marginadas, sino que en ocasiones ha distorsionado las posibilidades de equidad y democracia que tiene la sociedad colombiana.



Foto: 18 personas perdieron la vida en el bar el Aracatazzo ubicado en el barrio el bosque de Chigorodó, en acción realizado por paramilitares de las ACCU. Algunos de los asesinados eran dirigentes y líderes de la Unión Patriótica.
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 14 de agosto de 1995.

4. Las influencias y presiones de las políticas internacionales

No cabe duda de que Estados Unidos ha sido el país que más ha influido en el conflicto colombiano. Primero con su doctrina anticomunista y contrainsurgente en el marco de la guerra fría, luego con la guerra contra las drogas, y finalmente con su cruzada contra el terrorismo. Su presencia ha estado signada por el tutelaje político pero también por la ayuda financiera.

El Frente Nacional adopta una política dual de reformas, inspiradas en la Alianza para el Progreso, y de anti-comunismo en las fuerzas militares, propio de Estados Unidos en la guerra fría. Esta doctrina del enemigo interno alcanza su máxima expresión con el Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala. En los años 80 es indudable la influencia de Ronald Reagan con sus teorías contrainsurgentes que derivaron en la creación de grupos paramilitares en todo el continente.

La guerra contra las drogas emprendida por Estados Unidos transformó por completo la actuación de fuerza pública en Colombia. Primero doctrinariamente al identificar el conflicto como un asunto sobre todo criminal. Segundo porque con el Plan Colombia vinieron incluidos unos estándares de derechos humanos severamente vigilados por el Congreso de ese país, que se convirtieron en un incentivo para modernizar y civilizar a la fuerza pública.



Foto: 18 obreros bananeros fueron asesinados por la guerrilla de las FARC en la finca los Kunas, municipio de Carepa, en Urabá. Esta masacre fue realizada como retaliación por los hechos ocurridos días antes en el bar el Aracatazo de Chigorodó. Fotografía: Jesús Abad Colorado© 20 de agosto de 1995.

Finalmente la lucha antiterrorista que emprendió Estados Unidos desde el año 2001 sirvió de telón de fondo para clausurar durante un largo tiempo las posibilidades de negociación con la guerrilla, y leer todos los actos insurgentes en clave de terrorismo, sin negar que tanto guerrillas como paramilitares hubiesen incurrido en actos de esta naturaleza.

Del otro lado, las corrientes revolucionarias y socialistas han influido de diferentes maneras en los grupos insurgentes. La revolución cubana fue la inspiración inicial de todos los grupos guerrilleros, pero puede decirse que es el triunfo de los sandinistas, en Nicaragua en 1979, el que marcó definitivamente a los rebeldes, pues les mostró la necesidad de ampliar las bases sociales de la revolución y les ilusionó con la posibilidad de tener insurrecciones populares, en combinación con la guerra popular prolongada.

La caída del socialismo crea una tendencia mundial de cierre de los conflictos internos por vía negociada a finales de los 80 y principios de los 90, incluyendo el nicaragüense que se define en unas elecciones luego de una desgastante guerra. Parte de la insurgencia colombiana se reincorpora a la vida civil, en el entendido que ya no hay apoyo internacional para la lucha armada. Otra parte, las FARC y el ELN se separan por largo tiempo de cualquier corriente internacional, hasta principios de este siglo, cuando corrientes socialistas se imponen por la vía electoral en varios países de América Latina.

La influencia externa también ha sido muy fuerte para contener los efectos nefastos del conflicto. A partir de los años 90, la agenda de Derechos Humanos tanto desde la OEA, como desde la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea, así como de las organizaciones de derechos humanos internacionales, han sido cruciales para dar soporte a las víctimas, hacer visible la tragedia que ha significado la guerra para los civiles, luchar contra la impunidad y fortalecer las instituciones.

Igualmente el Estatuto de Roma vigente desde 2002 y la internacionalización de la justicia en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad ha significado cambios importantes tanto para el Estado como para las guerrillas y los grupos paramilitares. La implementación de la justicia transicional durante los procesos de negociación con los grupos armados es un efecto directo de esta nueva realidad.

5. La fragmentación del Estado

Más que ausencia del Estado, lo que ha habido durante la guerra en Colombia ha sido un Estado fragmentado y débil, tanto en lo territorial como en lo institucional.

La fragmentación puede notarse en las tensiones que ha habido entre poder civil y militar, en ciertas coyunturas claves para el conflicto. Por ejemplo, durante los procesos de paz de Belisario Betancur y Andrés Pastrana. Esta relativa autonomía militar, aunque formalmente quedó superada con la Constitución del 91, aflora todavía y no se ha resuelto de manera definitiva.

Otro dilema que ha enfrentado el Estado a lo largo del conflicto tiene que ver con su debilidad regional y local, especialmente en zonas alejadas de los centros del poder y del país más integrado. En estos años de guerra, el centro del país vio cómo se fortalecieron sus instituciones, mientras en la periferia subsisten los problemas de gobernabilidad, la corrupción y la falta de legitimidad. El supuesto de que la descentralización ayudaría integrar el país y cohesionarlo en medio de la diferencia y la diversidad, ha sido sabotado por los actores del conflicto. La brecha entre el sector integrado del país y el resto, parece ser muy profunda aún.

Material complementario:

Lectura básica:

CNMH, ¡BASTA YA! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, Capítulo 2: Bogotá – Colombia, Imprenta Nacional, Julio de 2013.

Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap1_30-109.pdf

Lecturas complementarias:

Título: ¿Por qué la guerra?

Autor: Francisco Leal Buitrago

Descripción: En esta columna, de manera sencilla, Francisco Leal analiza tres factores que considera angulares para entender la guerra en Colombia: la dispersión geográfica, la debilidad del Estado y la debilidad de los gobernantes.

Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/2808-por-que-la-guerra-en-colombia.html#comment-4707>

Título: El paramilitarismo, una política de Estado que devora al país

Autor: Javier Giraldo, S. J.

Descripción: Ensayo académico, publicado en el blog del Padre Javier Giraldo, donde se expone una juiciosa revisión histórica del desarrollo del paramilitarismo en Colombia. Texto publicado en Agosto del 2004.

Disponible en: <http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article76>

Título: El orangután con sacoleva, cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)

Autor: Francisco Gutiérrez.

Editorial: Debate (2014)

Descripción: El autor hace un riguroso análisis para explicar porqué violencia política y democracia formal no sólo han convivido durante cien años en Colombia, entre 1910 y 2010, sino que se han reproducido y retroalimentado.

Título: Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994

Autor: Marco Palacios Roza

Editorial: Norma

Descripción: "Este libro es, con todo y los aspectos de ensayo y crítica política que incorpora, sobre todo al referirse a la última década, un libro de historia, en el sentido más claro y elogioso posible: es un libro centrado en el análisis del Estado, (...) de los conflictos entre los partidos políticos, de las diferentes formas de violencia, siempre dentro del contexto de los grandes procesos de cambio social y económico: la industrialización, la migración a las ciudades, las frustraciones y limitaciones del sindicalismo o del reformismo agrario".

Título: Pasado y presente de la violencia en Colombia

Editores: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda

Editorial: La Carreta Editores. Tercera edición, 2007. Bogotá.

Descripción: Compilación de ensayos sobre la historia de la violencia en Colombia.

Título: "El conflicto Callejón sin salida". Informe Nacional de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para Colombia, 2003.

Capítulos recomendados: 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Autor: Naciones Unidas 2003

Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5626.pdf?view=1>

Descripción: La primera parte presenta una interpretación comprensiva sobre el carácter, dinámica y expresiones esenciales del conflicto armado en Colombia. Esta interpretación necesita mirar a la historia y al contexto político (Capítulo 1) como también a la geografía y las diferencias regionales (Capítulo 2) para apreciar mejor la creciente degradación del

conflicto (Capítulo 3).

La Segunda Parte analiza la relación entre conflicto armado y desarrollo humano, precisando los daños que el primero hace al segundo (Capítulo 4), mirando su impacto sobre las víctimas (Capítulo 5) y explicando cómo el desarrollo humano daría solución al conflicto (Capítulo 6)

Título: "Colombia Rural. Razones para la Esperanza". Informe Nacional de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para Colombia, 2011.

Autor: Naciones Unidas 2011

Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5626.pdf?view=1>

Descripción: análisis del problema de la tierra en Colombia y su relación con el conflicto armado.

Título: "Ahí les dejo esos fierros"

Autor: Alfredo Molano Bravo

Editorial: Aguilar, 2009

Descripción: El libro presenta seis crónicas, basadas en historias reales, que cuentan la historia de personas que hicieron parte del conflicto armado. Dos historias hablan de los años cincuenta, época de las autodefensas campesinas de 'Manuel Marulanda' y 'Jacobo Arenas'; las dos siguientes sobre militantes del M-19 y las últimas sobre paramilitares.

Título: Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949 - 2013

Autor: Centro de Memoria Histórica, 2013

Descripción: Este informe reconstruye la trayectoria múltiple de las FARC; su situación militar, su contexto internacional, la fatiga social con la guerra y sus agrietadas relaciones con la población civil.

Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2013/guerrilla-y-poblacion-civil>

Video:

Paramilitares de nuevo cuño: Alfredo Molano en entrevista para Unimedios. https://www.youtube.com/watch?v=_vtRBoPvnQM

Guía de trabajo:

1. Explique la siguiente afirmación: La evolución del conflicto armado y su degradación no hubiesen sido posibles sin las transformaciones estratégicas de los actores armados.
2. Elabore una breve reconstrucción de la trayectoria de las guerrillas en Colombia.
3. Elabore una breve reconstrucción de la trayectoria de los paramilitares en Colombia.
4. Elabore una breve reconstrucción de dinámica del Estado frente al conflicto Colombia.
5. ¿Es posible establecer una relación entre la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra con conflicto armado en Colombia?
6. ¿De qué manera la persistencia del conflicto armado cuestiona la estabilidad de la democracia en Colombia?
7. Señale tres formas en que el narcotráfico ha sido sostén y dinamizador del conflicto armado.

8. Describa uno de los momentos en que el contexto internacional ha influenciado el pensamiento y las acciones de los actores armados ilegales.

9. De qué forma la lucha antiterrorista y contrainsurgente a nivel mundial, impactó las acciones del Estado colombiano frente conflicto armado.

10. Por qué se afirma que la presencia del Estado en el territorio es diferenciada con tendencia a la fragmentación.

11. El informe hace énfasis en dos expresiones de la fragmentación del Estado que han sido determinantes en el desarrollo del Conflicto Armado: la fragmentación territorial y la fragmentación institucional. Explique a que se refiere cada una.